TEMA 1. LA HACIENDA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. EL DERECHO PRESUPUESTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO. LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA. LA HACIENDA PÚBLICA COMO TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Apuntes del tercer ejercicio del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

1. LA HACIENDA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA **1**
1.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO FINANCIERO 1
1.2. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DEL DERECHO TRIBUTARIO 3
1.3. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LOS GASTOS PÚBLICOS 4

2. EL DERECHO PRESUPUESTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO **6**
2.1. CONCEPTO 6
2.2. CONTENIDO 6

3. LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA **7**
3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 7
3.2. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DE GASTO 9
3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COERCITIVAS 11
3.4. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA 13

4. LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA **14**
4.1. INTRODUCCIÓN 14
4.2. ESTRUCTURA 14
4.3. PRINCIPIOS GENERALES 16

5. LA HACIENDA PÚBLICA COMO TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES **18**
5.1. INTRODUCCIÓN 18
5.2. DERECHOS DE LA HACIENDA PÚBLICA 18
5.3. OBLIGACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA 21

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1. LA HACIENDA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) dedica expresamente el Título VII (arts. 128 a 136 CE) a «Economía y Hacienda», comenzando con el establecimiento del principio de subordinación de toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, al interés general (art. 128.1 CE) y reconociendo la iniciativa pública en la actividad económica con la especificación de que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Previamente, y en tanto principio rector de la política social y económica, el art. 40.1 CE indica:

«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.»

Junto a los principios propios del Derecho financiero, cabe citar como primera consideración la aplicación también a la Administración financiera de las pautas esenciales que respecto de la actuación de la Administración Pública se determinan en el art. 103.1 CE: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

1.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO FINANCIERO

1.1.1. Principio de legalidad financiera

El principio de legalidad actúa en un doble plano.

En materia de ingresos públicos, la Constitución es especialmente explícita. El art. 31.3 CE exige ley para toda prestación personal o patrimonial de carácter público. El art. 133.1 CE atribuye la potestad originaria de establecer tributos exclusivamente al Estado mediante ley; las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) y las Corporaciones Locales solo pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.2 CE). El art. 133.3 CE extiende la reserva de ley a los beneficios fiscales sobre tributos estatales. El art. 134.7 CE prohíbe que la Ley de Presupuestos cree tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea. El art. 135.3 CE (redacción 2011) exige que el Estado y las Comunidades Autónomas estén autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

En materia de gastos públicos, el principio se enuncia en el art. 133.4 CE: «Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes». El vínculo más estrecho entre legalidad y gasto público lo fija el art. 134.1 CE, al encomendar al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales «su examen, enmienda y aprobación».

1.1.2. Principio de justicia financiera

La Constitución enuncia, en dos apartados diferenciados de su art. 31 CE, el principio de justicia en relación con los ingresos y con los gastos.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1.1.2.1. Principio de justicia tributaria

El art. 31.1 CE es el precepto central:

> ***«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.»***

De este precepto se extraen los subprincipios siguientes:

- **Generalidad**: el pronombre «todos» exige que nadie quede al margen del deber de contribuir, sin perjuicio de posibles beneficios fiscales.
- **Capacidad económica**: la contribución ha de articularse sobre la riqueza efectiva del contribuyente (art. 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en adelante, LGT).
- **Igualdad**: la cuantía de cada aportación se fija en función de la capacidad económica, sin discriminación. El art. 138.2 CE impide que las diferencias entre Estatutos de Autonomía impliquen privilegios económicos o sociales.
- **Progresividad**: se predica del sistema tributario en su conjunto, no de cada figura concreta.
- **No confiscación**: el sistema no puede tener alcance confiscatorio, esto es, agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir, lo que ocurriría si las figuras tributarias vigentes llegaran a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades (Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de 4 de octubre).

1.1.2.2. Principio de justicia del gasto público

El art. 31.2 CE cierra el círculo:

> ***«El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.»***

1.1.3. Principio de control de la actividad financiera

La actividad financiera, por su trascendencia práctica, está sujeta a un doble sistema de control. El **control externo** lo ejerce el Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, que depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (art. 136.1 CE), sin perjuicio de su propia jurisdicción (art. 136.2 CE), y sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces (art. 136.3 CE). El **control interno** corresponde fundamentalmente a la IGAE, que ejerce la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.

A ellos se suma el control político, que corresponde a las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura, que se adopta por mayoría absoluta (art. 113 CE).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1.1.4. Principio de redistribución de la renta y la riqueza

El art. 131.1 CE atribuye al Estado la posibilidad de planificar mediante ley la actividad económica general para «atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución». El art. 138.1 CE propugna «el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español».

1.1.5. Principios de solidaridad y coordinación entre las Haciendas Públicas

El art. 2 CE proclama la solidaridad entre nacionalidades y regiones, encargando al Estado su realización efectiva (art. 138.1 CE). En el plano financiero, la manifestación más destacada es el **Fondo de Compensación** que ordena constituir el art. 158.2 CE «con destino a gastos de inversión», con el fin de «corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad», y cuyos recursos distribuyen las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Su desarrollo está en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, conforme a la cual, en virtud del art. 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), se dotan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado dos Fondos de Compensación Interterritorial, denominados Fondo de Compensación y Fondo Complementario.

El art. 156.1 CE precisa que las Comunidades Autónomas «gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles».

La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la «Hacienda general y Deuda del Estado» (art. 149.1.14.ª CE) y enumera los recursos de las Comunidades Autónomas: impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito (art. 157.1 CE).

1.2. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DEL DERECHO TRIBUTARIO

1.2.1. Principio de irretroactividad de las sanciones

Los arts. 9.3 CE («la Constitución garantiza […] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales») y 25.1 CE («nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento») proclaman este principio también para las sanciones tributarias. Por su parte, el art. 10.2 de la LGT recoge la regla de retroactividad favorable: las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1.2.2. Principio de no privación de libertad

El art. 25.3 CE establece que «la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad». Esta regla se aplica plenamente al ámbito tributario-sancionador.

1.2.3. Principio de territorialidad

El art. 157.2 CE prohíbe a las Comunidades Autónomas adoptar «en ningún caso» medidas tributarias «sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios». Este principio de territorialidad preserva la unidad del mercado interior frente al fraccionamiento tributario derivado del Estado autonómico.

1.2.4. Principio de sistematización

Destaca Albiñana la circunstancia de que el art. 31.1 CE remita la aplicación de varios principios al «sistema tributario», no a los tributos que lo formen. Hoy los tributos solo se conciben formando un sistema racionalmente articulado según las capacidades económicas que gravan, que evite la doble imposición interna y las sobreimposiciones de alcance confiscatorio.

1.3. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LOS GASTOS PÚBLICOS

Los principios de anualidad, universalidad y unidad se deducen del art. 134.2 CE, que regula los Presupuestos Generales del Estado, y el de estabilidad presupuestaria, del artículo siguiente; son los principios presupuestarios en sentido estricto.

1.3.1. Principio de anualidad

«Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual» (art. 134.2 CE). Cada ejercicio presupuestario coincide con el año natural (art. 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en adelante, LGP). Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4 CE).

1.3.2. Principio de universalidad

Los Presupuestos «incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal» (art. 134.2 CE). Ni un gasto ni un ingreso pueden quedar fuera del Presupuesto. En su ejecución, los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso (art. 27.4 LGP).

1.3.3. Principio de unidad

Esa totalidad se recoge en un único documento presupuestario, en el que además «se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado» (art. 134.2 CE). Todos los entes que puedan considerarse «sector público estatal» quedan así integrados en unos mismos Presupuestos, lo que se concreta en el alcance subjetivo del art. 33 LGP.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1.3.4. Principio de estabilidad presupuestaria

En 2011 se reformó la CE en su art. 135 CE para incorporar este principio con rango constitucional. Las razones explicitadas en la Exposición de Motivos de la reforma apuntan a la necesidad de «limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos» en un contexto de creciente integración europea y globalización financiera.

El art. 135 CE, en su redacción vigente, establece:

> ***«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.»***
>
> ***«2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.»***
>
> ***«3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.»***

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 135.3, párrafo tercero CE). Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados (art. 135.4 CE). El art. 135.5 CE remite a una ley orgánica el desarrollo de los principios del artículo y la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera, y le impone regular en todo caso la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse; la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural; y la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Fue la disposición adicional única de la reforma la que exigió aprobar esa ley orgánica antes del 30 de junio de 2012: ese mandato se cumplió con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF).

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere el art. 135 CE, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias (art. 135.6 CE).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creó este organismo, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el art. 135 CE, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas.

En cuanto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Constitución sitúa la autonomía de las entidades territoriales y su suficiencia financiera en los arts. 137 a 142 y 156 a 158 CE. Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas (art. 142 CE), nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

2. EL DERECHO PRESUPUESTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO

2.1. CONCEPTO

El Derecho presupuestario es una de las dos ramas del Derecho financiero —junto al Derecho tributario— y constituye, en una primera aproximación, «la ordenación jurídica del gasto público». Su institución central es el presupuesto, que no es mera cuenta de ingresos y gastos, sino una norma jurídica con plena eficacia en el ordenamiento.

La razón de que el Derecho presupuestario gravite fundamentalmente sobre el gasto radica en la distinta naturaleza jurídica de los ingresos y los gastos en nuestro ordenamiento. El sistema tributario es de carácter permanente y no rige para los tributos el principio de anualidad: las normas tributarias entran en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa, y se aplican por plazo indefinido, salvo que se fije un plazo determinado (art. 10 LGT). El presupuesto, por tanto, no es fuente de Derecho tributario —su estado de ingresos es una estimación, no una autorización—, salvo en lo que permite el art. 134.7 CE: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, pero podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Sí es, en cambio, fuente de Derecho de los gastos públicos: sin crédito presupuestario no cabe gasto.

Rodríguez Bereijo define el Derecho presupuestario como el «conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la preparación, aprobación, ejecución y control del Presupuesto del Estado y de los demás entes públicos».

Esta definición ha de complementarse con el concepto de presupuesto que subyace a ella: acto legislativo mediante el cual se autoriza el montante máximo de los gastos a realizar durante un período de tiempo en las atenciones que detalladamente se especifican, y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos.

2.2. CONTENIDO

2.2.1. Aspecto jurídico-político

El Derecho presupuestario regula las relaciones entre los poderes del Estado —Legislativo y Ejecutivo— en el ciclo presupuestario. Corresponde al Derecho presupuestario distribuir las competencias en materia de preparación, aprobación, ejecución y control del programa de ingresos y gastos del Estado. La **elaboración** corresponde al Gobierno (art. 134.1 CE), que debe presentar

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de la expiración del presupuesto vigente (art. 134.3 CE). El examen, la enmienda y la **aprobación** corresponden a las Cortes Generales (art. 134.1 CE), y toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6 CE). Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario (art. 134.5 CE). La **ejecución** vuelve al Poder Ejecutivo, a través de sus centros gestores. Finalmente, el **control** se distribuye entre la IGAE en su vertiente interna, el Tribunal de Cuentas —supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público— en la externa y las Cortes Generales en la política (art. 136 CE y Título VI LGP).

2.2.2. Aspecto jurídico-financiero

El Derecho presupuestario contiene dos tipos de mecanismos jurídicos:

a) **Autorizaciones legislativas**: dota a la Administración de los medios económicos necesarios para desarrollar sus funciones mediante la concesión de créditos para atender sus gastos.

b) **Limitaciones**: en un doble sentido. En la esfera interna, disciplina el ejercicio de la potestad financiera de la Administración en materia de gastos públicos, reglando las competencias en el manejo de los caudales públicos. En la esfera externa, la Ley de Presupuestos afecta a las situaciones jurídicas de los particulares frente al Estado: el crédito presupuestario es el límite financiero de la actuación administrativa, pues los créditos para gastos son limitativos y son nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que adquieran compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos autorizados.

3. LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

La LOEPSF dio cumplimiento al mandato contenido en el art. 135.5 CE y derogó la normativa anterior: la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.

La ley persigue tres objetivos:

- garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas;
- fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española; y
- reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

Ha sido modificada seis veces: por las Leyes Orgánicas 4/2012, de 28 de septiembre, 6/2013, de 14 de noviembre, 9/2013, de 20 de diciembre, 6/2015, de 12 de junio, 1/2016, de 31 de octubre, y 2/2024, de 1 de agosto, cuya disposición final cuarta dio nueva redacción al art. 15.6 LOEPSF.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

Ámbito subjetivo (art. 2 LOEPSF). El sector público, a efectos de la ley, comprende:

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales al que remite el precepto —el Reglamento (CE) 2223/96, hoy sustituido por el SEC 2010 del Reglamento (UE) 549/2013—, integrado por los subsectores:

   a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central;

   b) Comunidades Autónomas;

   c) Corporaciones Locales;

   d) Administraciones de Seguridad Social.

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas, no incluidas en el apartado anterior, que tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

Principios del Capítulo II:

- Estabilidad presupuestaria (art. 3 LOEPSF): la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural de las Administraciones Públicas (en adelante, AAPP); para entidades del art. 2.2 LOEPSF, posición de equilibrio financiero.

- Sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPSF): capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y la normativa europea. Existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el período medio de pago a proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad; y, para el cumplimiento del principio, las operaciones financieras se someten al principio de prudencia financiera.

- Plurianualidad (art. 5 LOEPSF): la elaboración de presupuestos se enmarcará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos.

- Transparencia (art. 6 LOEPSF): contabilidad, presupuestos y liquidaciones contendrán información suficiente y adecuada para verificar la situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea.

- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 7 LOEPSF): las políticas de gasto público se encuadrarán en un marco de planificación plurianual y de

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

programación y presupuestación, y la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad.

- Responsabilidad (art. 8 LOEPSF): la Administración que incumpla las obligaciones de esta Ley, así como la que provoque o contribuya a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asume, previa audiencia, las responsabilidades derivadas en la parte que le sea imputable. El Estado no asume ni responde de los compromisos de las CCAA, de las Corporaciones Locales ni de los entes del art. 2.2 vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.

- Lealtad institucional (art. 9 LOEPSF): cada Administración debe valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de Administraciones, respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas, ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados, facilitar a las demás Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que estas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

3.2. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DE GASTO

Instrumentación del principio de estabilidad (art. 11 LOEPSF). Las notas esenciales son: con carácter general, **todas las AAPP** tienen prohibido incurrir en déficit estructural (déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales), si bien en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, el conjunto puede alcanzar un déficit estructural del 0,4% del PIB nacional en términos nominales (o el límite europeo si fuera inferior).

El Estado y las CCAA pueden incurrir excepcionalmente en déficit estructural por catástrofes naturales, recesión económica grave —definida conforme a la normativa europea, exigiéndose en cualquier caso una tasa de crecimiento real anual negativa del PIB según las cuentas anuales de la contabilidad nacional— o emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo (art. 11.3 LOEPSF), y en estos casos debe aprobarse un plan de reequilibrio.

Las Corporaciones Locales deben mantener posición de equilibrio o superávit presupuestario. Las Administraciones de la Seguridad Social deben mantener equilibrio o superávit presupuestario, si bien excepcionalmente pueden incurrir en déficit estructural con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, minorándose entonces en cuantía equivalente el déficit estructural máximo admitido para la administración central.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria (art. 11.6 LOEPSF).

Regla de gasto (art. 12 LOEPSF). La variación del gasto computable de la Administración Central, las CCAA y las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda superior al objetivo, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda de los planes económico-financieros y de reequilibrio de los arts. 21 y 22 LOEPSF. Se entiende por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las CCAA y Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia la calcula el Ministerio de Economía con la metodología de la Comisión Europea (art. 12.3 LOEPSF). Los cambios normativos que aumenten permanentemente la recaudación permiten aumentar el gasto computable en esa cuantía, y los que la disminuyan obligan a reducirlo (art. 12.4 LOEPSF). Los ingresos por encima de lo previsto se destinan íntegramente a reducir la deuda pública (art. 12.5 LOEPSF).

Límite de deuda (art. 13 LOEPSF). El volumen de deuda pública, definida conforme al Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de las Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del PIB nacional en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuye así:

- Administración Central: 44% del PIB.
- Conjunto de Comunidades Autónomas: 13% del PIB. El límite de cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 13% de su PIB regional.
- Conjunto de Corporaciones Locales: 3% del PIB.

La Administración que supere su límite no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto.

Prioridad absoluta de pago de la deuda (art. 14 LOEPSF). El pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública (art. 15 LOEPSF). Los fija el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, en el primer semestre de cada año, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, que deben emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción de las propuestas, remitidas antes del 1 de abril. Se refieren a los **tres ejercicios siguientes**, para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada subsector, incluida la Administración central, y se expresan en porcentaje del PIB nacional nominal; el de estabilidad, en términos de capacidad o necesidad de financiación según la definición del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El acuerdo incluye el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado al que se refiere el art. 30 LOEPSF (art. 15.1 LOEPSF). El objetivo de estabilidad tiene en cuenta la regla de gasto y el

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

saldo estructural del ejercicio inmediato anterior; el de deuda ha de ser coherente con él y, si en los supuestos previstos en el art. 13.3 LOEPSF se superan los límites señalados en el art. 13.1 LOEPSF, deberá garantizar una senda de reducción de deuda pública acorde con la normativa europea (art. 15.3 LOEPSF); para fijar ambos se tienen en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea. Acompaña a la propuesta un informe que evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años del horizonte temporal de los objetivos. Lo elabora el Ministerio de Economía y Competitividad —así lo nombra el precepto—, previa consulta al Banco de España y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, y contiene el cuadro económico de horizonte plurianual (art. 15.5 LOEPSF).

El acuerdo se remite a las Cortes Generales con esas recomendaciones y ese informe. Tras debate en Pleno, el Congreso y el Senado se pronuncian sucesivamente sobre los objetivos. Si el Congreso los aprueba y el Senado los rechaza, vuelven a votarse en el Pleno del Congreso y quedan aprobados si este los ratifica por **mayoría simple**. Si se rechazan, el Gobierno remite otro acuerdo en el plazo máximo de un mes. Aprobados los objetivos, los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas han de acomodarse a ellos.

3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COERCITIVAS

La ley articula tres tipos de medidas para asegurar el cumplimiento de los principios:

a) Medidas preventivas (arts. 18 y 19 LOEPSF): incluyen el seguimiento de la ejecución presupuestaria y los ajustes de gasto público. Cuando la deuda de una Administración Pública se sitúe por encima del 95% de los límites establecidos para ella en el art. 13.1 LOEPSF, solo se le permitirán operaciones de endeudamiento de tesorería. Se prevé también un mecanismo de alerta temprana: si el Gobierno aprecia riesgo de incumplimiento de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable, que dispondrá de un mes para adoptar medidas.

b) Medidas correctivas (arts. 20 a 24 LOEPSF): constatado el incumplimiento, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento. Las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito de los arts. 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLRHL), requerirán asimismo, cuando incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o el de deuda pública, autorización del Estado para el endeudamiento a largo plazo o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera. La concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por la Administración Central con Comunidades Autónomas incumplidoras requerirá informe favorable previo del Ministerio de Hacienda.

En caso de incumplimiento, deberá elaborarse un plan económico-financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto (art. 21 LOEPSF). Si se producen los supuestos excepcionales del art. 11.3 LOEPSF o los del art. 13.3 LOEPSF, se presentará un plan de reequilibrio (art. 22 LOEPSF). Los planes son tramitados y supervisados conforme al art. 23 LOEPSF, con seguimiento trimestral, semestral en el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los arts. 111 y 135 del TRLRHL (art. 24 LOEPSF).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

No obstante, el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial (en adelante, RDL 13/2026), convalidado por el Congreso de los Diputados, no modifica la LOEPSF, sino que exceptúa su aplicación: su art. 4 del Real Decreto-ley 13/2026 dispone que en los ejercicios 2026 y 2027 no son de aplicación los arts. 21 y 23 LOEPSF por las Entidades Locales que incumplan, en las liquidaciones de presupuestos de 2025 o de 2026, el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales o del exceso de financiación afectada resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

La excepción es parcial: alcanza solo a la parte que se derive exclusivamente del empleo de dichos recursos, de modo que sigue siendo exigible el plan económico-financiero por el déficit o el exceso de gasto computable, respecto del límite establecido con arreglo al art. 12, que supere el importe de aquellos recursos. En todo caso es necesario que el período medio de pago a los proveedores de la corporación local, según el último dato publicado en la fecha en que finalice el plazo máximo de un mes del art. 23.1, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

c) Medidas coercitivas (arts. 25 y 26 LOEPSF): en caso de falta de presentación, aprobación o incumplimiento del plan, o cuando el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la comunicación prevista en el art. 20.6 LOEPSF, la Administración responsable deberá:

i) aprobar en quince días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención (si lo exigen los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos pasan a ejercerlas el Estado);

ii) constituir, cuando lo solicite el Ministerio de Hacienda, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal (art. 25.1.b) LOEPSF), que en las entidades locales es el 2,8% de sus ingresos no financieros (disposición final sexta LOEPSF).

Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se ha presentado o aprobado el plan, o no se han aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses; si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persiste el incumplimiento, podrá acordarse que el depósito se convierta en multa coercitiva (art. 25.1.b) LOEPSF). De no adoptarse alguna de las medidas del apartado i), o de resultar insuficientes, el Gobierno puede acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada (art. 25.2 LOEPSF). Si una Comunidad Autónoma no adopta el acuerdo de no disponibilidad, no constituye el depósito o no aplica las medidas propuestas por la comisión de expertos, el Gobierno, de conformidad con el art. 155 CE, requerirá a su Presidente para que lo haga y, si no atiende el requerimiento, adoptará con la aprobación por mayoría absoluta del Senado las medidas necesarias para obligarla a su ejecución forzosa (art. 26.1 LOEPSF). En las Corporaciones Locales el requerimiento y el cumplimiento forzoso corresponden al Gobierno o a la Comunidad Autónoma con tutela financiera, y la persistencia en el incumplimiento puede considerarse gestión gravemente dañosa y llevar a la disolución de sus órganos (art. 26.2 y 3 LOEPSF).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

3.4. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

El Capítulo V refuerza el principio de transparencia. Los Presupuestos de cada Administración se acompañarán de la información precisa para relacionar su saldo de ingresos y gastos con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Antes del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda información sobre las líneas fundamentales de sus Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea, entre ella la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

El Capítulo VI regula la gestión presupuestaria, reforzando la planificación plurianual mediante un plan presupuestario a medio plazo, que se incluye en el Programa de Estabilidad y en el que se enmarca la elaboración de los presupuestos anuales (art. 29.1 LOEPSF). Extiende la obligación de aprobar un límite máximo de gasto no financiero, que alcanza a todas las Corporaciones Locales (art. 30 LOEPSF), y la de dotar un fondo de contingencia (art. 31 LOEPSF) para atender necesidades no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, obligación esta última que en el ámbito local solo alcanza a las Corporaciones incluidas en los arts. 111 y 135 del TRLRHL, y establece que el superávit presupuestario debe destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto, con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit, y en la Seguridad Social aplicarse prioritariamente al Fondo de Reserva (art. 32 LOEPSF).

El art. 5 del RDL 13/2026 exceptúa a su vez la aplicación de este último precepto, sin modificarlo, durante el ejercicio 2026 y solo por las Entidades Locales que cumplan la totalidad de cuatro requisitos:

- deuda viva a 31 de diciembre de 2024 no superior al 65% de sus ingresos corrientes liquidados en 2024;
- cumplimiento de la regla de gasto en 2024;
- superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, simultáneamente, en la liquidación del presupuesto de 2024; y
- período medio de pago a los proveedores, según el último dato publicado, dentro del plazo máximo de pago de la normativa sobre morosidad.

Esas entidades pueden destinar el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a financiar gastos no financieros, siempre que su ejecución permita cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en 2026.

El art. 5.2 del RDL 13/2026 aplica además en 2026 al superávit de 2025 las reglas de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, teniendo en cuenta la disposición adicional decimosexta del TRLRHL. Esas mismas reglas se prorrogan para 2026 y los cuatro ejercicios siguientes, respecto del superávit o del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio inmediato anterior a cada uno de ellos, y en ese caso solo para financiar el gasto de inversión en el grupo de programas «152. Vivienda», sin que la corporación local pueda incurrir en déficit al final del ejercicio en el que

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

se aplique el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio inmediato anterior.

4. LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA

4.1. INTRODUCCIÓN

La LGP es el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal. Su promulgación surge de la necesidad de mejorar y ampliar la normativa vigente —la LGP de 1977 y el posterior texto refundido de 1988— con vistas a lograr una mayor racionalización del proceso presupuestario, en línea con los nuevos condicionantes que enmarcan la actividad financiera del Estado.

Entre las razones que motivaron la nueva norma se encuentran:

- la corrección de la dispersión de la legislación presupuestaria producida tras el texto refundido de 1988 (tanto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como en las leyes de presupuestos anuales o las Leyes de Acompañamiento);
- el traslado a la norma de las más modernas teorías y técnicas de presupuestación, control y contabilidad;
- el continuo proceso de descentralización territorial;
- la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria Europea;
- el nuevo marco financiero de la Seguridad Social; y
- la aprobación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, que hizo inevitable la elaboración de una nueva disposición legal que regulara el régimen económico-financiero del sector público estatal.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2005, si bien determinados preceptos —entre ellos los arts. 2 y 3 LGP, a efectos de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, varios capítulos de los títulos II y IV y el art. 86.2.Sexta LGP del título III— lo hicieron ya el 1 de enero de 2004 (disposición final sexta).

4.2. ESTRUCTURA

Las materias reguladas por la LGP se estructuran en siete títulos: I (Ámbito de aplicación y Hacienda Pública estatal), II (Presupuestos Generales del Estado), III (Relaciones financieras con otras Administraciones), IV (Tesoro Público, deuda del Estado y operaciones financieras), V (Contabilidad del sector público estatal), VI (Control de la gestión económico-financiera por la IGAE) y VII (Responsabilidades). La ley concluye con 26 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria única y 6 finales.

Objeto (art. 1 LGP). Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

Sector público estatal (art. 2 LGP). A los efectos de la LGP, forman parte del sector público estatal la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal. Este último lo integran los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado —organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales—, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios adscritos a la Administración General del Estado, las fundaciones del sector público adscritas a ella, los fondos sin personalidad jurídica, las universidades públicas no transferidas, las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, y cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.

Forman también parte del sector público estatal los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado; su régimen económico-financiero se regula por la LGP, con las especialidades de sus normas de creación, organización y funcionamiento, si bien su régimen de contabilidad y de control queda sometido en todo caso a dichas normas, sin que en esas materias les sea aplicable la LGP. La ley no se aplica a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria conforme al art. 72 CE, sin perjuicio de la coordinación necesaria para elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. A su vez, el art. 3 LGP divide el sector público estatal en tres subsectores: público administrativo, empresarial y fundacional.

Régimen jurídico aplicable (art. 4 LGP). El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria.

En particular, se someterán a su normativa específica:

- el sistema tributario estatal;
- los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social, así como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema;
- el régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios especiales;
- el régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las comunidades autónomas y entidades locales;
- el régimen jurídico general de las Haciendas Locales;
- los principios básicos y las normas fundamentales del régimen jurídico de las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades integrantes del sector público estatal con cargo a sus presupuestos o a fondos de la Unión Europea;
- el régimen general de la contratación de las entidades integrantes del sector público estatal; y

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

- el régimen de contracción de obligaciones financieras y de realización de gastos, en aquellas materias que, por su especialidad, no se hallen reguladas en esta ley.

Con carácter supletorio se aplican las demás normas de Derecho administrativo y, en su defecto, las de Derecho común.

4.3. PRINCIPIOS GENERALES

En la LGP, la programación presupuestaria se rige por los principios de la LOEPSF expuestos en el epígrafe 3.1, y toda actuación del sector público estatal que afecte a los gastos públicos —disposiciones legales y reglamentarias en fase de elaboración y aprobación, actos administrativos, contratos o convenios de colaboración— debe valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales (art. 26 LGP).

Los créditos de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por sus modificaciones conforme a la LGP, con el carácter limitativo y vinculante de su nivel de especificación, y sus recursos, a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados (art. 27.2 y 3 LGP).

La LGP recoge los siguientes principios clásicos, además de los relacionados con la estabilidad presupuestaria de la LOEPSF:

4.3.1. Principio de unidad de patrimonio

El principio de unidad de patrimonio se apoya en el concepto de Hacienda Pública estatal del art. 5.1 LGP: al englobar bajo un mismo concepto los derechos y las obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos, los trata como un todo.

4.3.2. Principio de reserva de ley

El art. 4 LGP establece un principio que puede denominarse de «reserva de ley impropia»: no reserva materias a la ley formal, sino que remite las ocho materias de su apartado 2 a «su normativa específica», y declara supletorias las demás normas de Derecho administrativo y, en su defecto, las de Derecho común.

4.3.3. Principio de competencia

Sintetiza la distribución de competencias dentro del ciclo presupuestario: elaboración (Gobierno) y examen, enmienda y aprobación (Cortes Generales), a las que sigue la ejecución, de nuevo a cargo del Poder Ejecutivo. La LGP concreta estas competencias en cada fase del procedimiento.

4.3.4. Principio de unidad de caja

El principio de unidad de caja supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, lo que comporta el establecimiento de una administración especial para, de esa forma centralizada, percibir los ingresos y realizar los pagos (el Tesoro Público).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

El art. 91 LGP incluye entre las funciones del Tesoro Público: «Servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias». El art. 90 LGP define el Tesoro Público como el conjunto de todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo estatal, con exclusión de los sujetos contemplados en el art. 2.2 b), d), g) y h) y 2.3 LGP, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

El art. 108 LGP establece que, con carácter general, los ingresos y pagos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan en el Banco de España. La apertura de estas cuentas requerirá de autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero.

El art. 109 LGP regula la apertura de cuentas de situación de fondos de las entidades cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público fuera del Banco de España, que requerirá previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las condiciones de utilización, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero. Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos establecido en el art. 23 de la LGP.

4.3.5. Principio del presupuesto anual

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural (art. 34 LGP). A él se imputan los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven, y las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Los créditos para gastos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas al final del ejercicio quedarán anulados de pleno derecho (art. 49 LGP), salvo los casos de incorporación de créditos (art. 58 LGP).

4.3.6. Principio de control

Por el órgano que lo ejerce, el control de la actividad económico-financiera del sector público estatal es:

- control interno, de carácter administrativo, que corresponde a la IGAE;
- control externo, que corresponde al Tribunal de Cuentas en su condición de supremo órgano fiscalizador (art. 140 LGP), sin perjuicio de su propia jurisdicción (art. 136.2 CE); y
- control político, que ejercen las Cortes Generales.

La LGP establece tres modalidades de control interno: la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

4.3.7. Principio de contabilidad (o publicidad)

El art. 119 LGP establece que las entidades integrantes del sector público estatal deberán aplicar los principios contables que correspondan para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados, así como para facilitar datos e información con trascendencia económica. Quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la IGAE.

Una de las principales novedades que introdujo la LGP es que regula los principios contables públicos en su art. 122 LGP.

El art. 123 LGP especifica los destinatarios de la información contable: la información que suministre la contabilidad de las entidades del sector público estatal estará dirigida a sus órganos de dirección y gestión, a los de representación política y a los de control externo e interno, a los organismos internacionales, en los términos y con los límites previstos reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en el art. 136 LGP.

4.3.8. Principio de preeminencia del Ministerio de Hacienda

El Ministro de Hacienda mantiene preeminencia sobre los demás miembros del Gobierno en el campo financiero. Los arts. 124 y 125 LGP distribuyen entre él y la IGAE las competencias en materia de contabilidad pública. Al Ministro de Hacienda le corresponde, a propuesta de la IGAE, aprobar el Plan General de Contabilidad Pública y las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, y determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la Cuenta General del Estado, entre otras competencias. La IGAE es el centro directivo y el centro gestor de la contabilidad pública.

5. LA HACIENDA PÚBLICA COMO TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

5.1. INTRODUCCIÓN

El art. 5.1 LGP caracteriza la Hacienda Pública estatal como «el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos». Esta definición presenta una perspectiva objetiva o material —centrada en los elementos que la componen— frente a la visión subjetiva, que haría hincapié en el sujeto u órgano a quien se encomienda la dirección y ejecución de la actividad financiera.

5.2. DERECHOS DE LA HACIENDA PÚBLICA

El art. 5.2 LGP establece que los derechos de la Hacienda Pública estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.

5.2.1. Derechos de naturaleza pública

«Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.» (art. 5.2 LGP)

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

La regulación de estos derechos se articula en torno a los siguientes elementos:

a) Nacimiento y extinción (art. 11 LGP). Los derechos de naturaleza pública se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho. Se extinguen por las causas previstas en la LGT y las demás previstas en las leyes. Sin perjuicio de lo establecido en la LGP y en la normativa reguladora de cada derecho, el procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción se someten a lo establecido en la LGT y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (RGR).

b) Prerrogativas (art. 10 LGP). Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho por su normativa reguladora, la cobranza se efectúa, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y goza de las prerrogativas establecidas para los tributos en la LGT y de las previstas en el RGR. Por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se introdujo la responsabilidad solidaria del pago de los derechos de naturaleza pública pendientes, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, para las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias del art. 42.2 LGT.

El carácter privilegiado de los créditos de la Hacienda Pública estatal le otorga el derecho de abstención en los procesos concursales, en cuyo curso, no obstante, podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que ponga fin al proceso judicial.

c) Administración (art. 6 LGP). La administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que esta u otras leyes atribuyen a otros departamentos o entidades del sector público estatal. El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública puede encomendarse a personas o entidades privadas que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.

d) Indisponibilidad (art. 7 LGP). Tres reglas vertebran el principio de indisponibilidad:

- No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal fuera de los casos regulados por las leyes.
- No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el art. 16 LGP para los derechos económicos de baja cuantía.
- Sin perjuicio de lo previsto en el art. 10 LGP para los procesos concursales, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someterlos a arbitraje, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

e) Compensación de deudas (art. 14 LGP). En los casos y con los requisitos establecidos reglamentariamente, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública estatal que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.

Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público.

Cuando una liquidación cuyo importe ha sido ingresado total o parcialmente sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir esta en la cantidad previamente ingresada.

La extinción mediante compensación de las deudas que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tengan con la Administración General del Estado se regulará por su legislación específica.

Las deudas que los organismos autónomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras entidades de derecho público tengan con la Administración General del Estado podrán realizarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. La referida compensación no podrá afectar a las cotizaciones sociales. Asimismo, serán compensables las deudas vencidas, líquidas y exigibles que tengan entre sí las entidades estatales de derecho público.

Las leyes reguladoras de los distintos ingresos de derecho público podrán prever el establecimiento de sistemas de cuenta corriente a efectos de facilitar la compensación y el pago de los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública estatal.

f) Prescripción (art. 15 LGP). Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal:

a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose el plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si esta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

La prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido en la LGT y se aplicará de oficio. Los derechos declarados prescritos deberán darse de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública estatal se ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora de la responsabilidad contable.

g) Intereses de demora (art. 17 LGP). Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengarán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. El interés de demora resulta de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios. Todo ello se entiende sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.

h) Preferencia en el cobro (art. 9 LGP). Cuando los organismos autónomos concurran con la Administración General del Estado, tendrá preferencia para el cobro de los créditos esta última. De

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

igual preferencia gozan los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquellos procedan; y cuando concurran créditos a favor de la Administración General del Estado con créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, se imputarán a prorrata de su respectivo importe.

i) Providencia de apremio (art. 12 LGP). Las providencias de apremio acreditativas del descubierto de las deudas correspondientes a los derechos de naturaleza pública, expedidas por los órganos competentes, son título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tienen la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. El procedimiento se suspenderá inmediatamente, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o que esta ha prescrito o ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.

j) Aplazamiento y fraccionamiento (art. 13 LGP). Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal en virtud de una relación jurídica de derecho público podrán aplazarse o fraccionarse, devengando el correspondiente interés de demora, en los casos, por los medios y a través del procedimiento establecido reglamentariamente. Deberán garantizarse, excepto en dos casos: los de baja cuantía, cuando sean inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda, y cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, salvo que ello produjera grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública estatal.

k) Derechos económicos de baja cuantía (art. 16 LGP). El Ministro de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

5.2.2. Derechos de naturaleza privada

El art. 19 LGP dispone que la efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho privado. En materia de administración e indisponibilidad, rigen también los arts. 6 y 7 LGP. Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades adeudadas en virtud de una relación jurídica de derecho privado en los casos y con las condiciones que establezca el Ministro de Hacienda para las correspondientes a la Administración General del Estado y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el del Ministerio de adscripción del organismo autónomo para las restantes.

5.3. OBLIGACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

El régimen jurídico de las obligaciones se contiene en los arts. 20 a 25 LGP (Sección 4.ª del Capítulo II del Título I). Sus notas fundamentales son:

a) Nacimiento (art. 20 LGP).

> ***«Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.»***

b) Exigibilidad (art. 21 LGP).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal solo son exigibles cuando resulten:

- De la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
- De sentencia judicial firme.
- De operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.

Si las obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación. En el ámbito de la Hacienda Pública estatal no podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y encomiendas de gestión con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en ellos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de ley aplicables en cada caso. No obstante, en los términos que determine el convenio de colaboración o la encomienda de gestión, el acreedor podrá percibir un anticipo por las operaciones preparatorias necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 10% de la cantidad total a percibir, y en tal caso deberán asegurarse esos pagos mediante la prestación de garantía, salvo que el acreedor sea una entidad del sector público estatal o que la normativa reguladora del gasto establezca lo contrario.

c) Extinción (art. 22 LGP). Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Prerrogativas (art. 23 LGP). Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes. Si para el pago fuese necesaria una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.

e) Demora en el pago (art. 24 LGP). Si la Administración no pagara al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el art. 17.2 LGP de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor —una vez transcurrido dicho plazo— reclame por escrito el cumplimiento.

En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

f) Prescripción (art. 25 LGP). Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación, o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o de la liquidación de la respectiva obligación.

Con la misma salvedad en favor de las leyes especiales, la prescripción se interrumpe conforme a las disposiciones del Código Civil. Las obligaciones que hayan prescrito serán dadas de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).